

Barraclough, Solon y Fernández, José A., **Diagnóstico de la reforma agraria chilena**, México, Siglo XXI, 1974, 323 pp.

“El informe es técnico, hasta tecnócrata a veces”, aclaran los autores de este trabajo para explicar la abundancia de cifras, cuadros y términos especializados. El ensayo estaba destinado a sugerir algunas reformas en la política agraria de la Unidad Popular en 1973.

En el campo chileno tenía lugar una situación doble: la burguesía agraria que había sido despojada de sus tierras se había propuesto derrocar al gobierno, aliada con los pequeños productores; mientras la UP intentaba contrarrestar esa amenaza apoyándose en los beneficiados por la reforma agraria. En los dos primeros años del gobierno de Allende los avances de las expropiaciones fueron “espectaculares”, pero se descuidó el control sobre la aguas, que seguía en poder de los grandes terratenientes. En vez de parcelar los latifundios en pequeñas propiedades, como ha ocurrido en otros países, se decidió formar grandes unidades productivas en casi todos los casos.

La falta de una política económica nacional coherente ocasionaba desajustes entre las necesidades del sector agrícola y la economía nacional, especialmente un desequilibrio entre la oferta interna y la demanda total de productos agropecuarios y las crecientes necesidades financieras de la agricultura, que no eran satisfechas. Factores decisivos para que aumentase la demanda de alimentos fueron el sabotaje, el acaparamiento y el contrabando, desarrollándose así un enorme mercado negro.

Aunque las condiciones no eran las mejores, los autores sostienen que era posible que el gobierno estableciera la "racionalidad económica" que su programa necesitaba, para lo cual debía crear la infraestructura necesaria para comprar los artículos agropecuarios directamente al productor.

Por otra parte, los organismos campesinos que debían ser embriones de nuevas formas de poder popular aún no tenían un funcionamiento preciso. Por la falta de una política unificada de la izquierda en ese aspecto, los Consejos Campesinos no tenían una participación importante en las decisiones oficiales sobre política agraria. Señalan los autores que la Democracia Cristiana tenía una posición hegemónica en sindicatos, cooperativas y otras organizaciones campesinas y que la única política eficaz por parte del gobierno era, más que aliarse en abstracto con la DC o cualquier otro grupo, desarrollar medidas que beneficiaran a los campesinos, que después de todo era la base social a la que se debía acudir. En lugar de disminuir, la oposición campesina al gobierno aumentó, debido a que las instituciones controladas por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional se aliaron debido a la falta de garantías a los pequeños agricultores y la falta de claridad en las políticas de la UP.

Hacía falta, sobre todo, desarrollar una política agraria que buscara aumentar la productividad, pero también la participación campesina y mejorar la distribución de los productos del campo. Sin embargo, aunque la expansión y el fortalecimiento del "área social" de la producción agrícola sólo podía lograrse con el apoyo activo de los trabajadores del campo, estos aspectos fueron descuidados y se permitió que la oposición tomase la delantera.

Raúl Trejo Delarbre